

RECURRENTE: [REDACTED]

RECURSO DE REVISIÓN: CESCJN/REV-1/2021

EXPEDIENTE: UT-A/0378/2020

Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Se da cuenta al Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Presidente, con el oficio **UGTSIJ/TAIPDP/0228/2021**, mediante el cual, el titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial remite el expediente electrónico **UT-A/0978/2020**, formado con motivo de la solicitud de información registrada con el folio **0330000288520** y que contiene glosado el oficio **INAI/STP/DGAP/1027/2020**, a través del cual se remite el recurso de revisión interpuesto por [REDACTED]. Conste.-

Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.¹

Acuerdo del Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual **SE DESECHA POR IMPROCEDENTE** el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en el artículo 155, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.²

Antecedentes

I. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, [REDACTED] hizo un requerimiento de información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, mismo que fue registrado bajo el folio **0330000288520**.

En dicha solicitud se cuestionó la aplicabilidad de lo resuelto por este Alto Tribunal en la contradicción de tesis 103/2020 a los

¹ En lo sucesivo, las fechas serán alusivas al presente año, salvo precisión expresa.

² **Artículo 155.** El recurso será desechado por improcedente cuando:

[...]

VI. Se trate de una consulta.

procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias iniciados por la Auditoría Superior de la Federación.³

II. Con motivo de lo anterior, en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Subdirector General de Transparencia y Acceso a la Información determinó: i) formar el expediente **UT-A/0378/2020** y ii) hacer del conocimiento del peticionario que lo expresado en su escrito no satisfizo los supuestos legales para ser considerada como una solicitud de acceso a la información, toda vez que lo requerido a este Alto Tribunal consistía en una consulta jurídica sobre la aplicabilidad de la contradicción de tesis 103/2020 a los procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias iniciados por la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, hizo saber al peticionario lo siguiente:

- i. El link en el que se encuentra la versión pública de la resolución emitida en la contradicción de tesis 103/2020.
- ii. Que la resolución antes mencionada dio lugar a la integración del criterio jurisprudencial número 2a./J. 47/2020 (10a).⁴

³ La solicitud se planteó en los términos siguientes: "Respecto a la contradicción de tesis 103/2020, quiero saber si es aplicable a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que ésta señala que los procedimientos no iniciados con anterioridad del 19/07/2017 se deben llevar a cabo el procedimiento conforme a la LGRA, sin embargo, para conductas realizadas con anterioridad al 19/07/2017 la ASF inicia y resuelve el procedimiento de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, el cual no posee una etapa de investigación, aunado a que es realizado por el área de responsabilidades, área y procedimiento diverso al que se realiza en la Dirección General de Investigación (área creada conforme a la LGRA para faltas administrativas).

Por lo que al ser diferentes y autónomos los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria y de responsabilidad administrativa, no deben confundirse ni invadir entre ellos las esferas jurídicas competenciales, no obstante causa confusión la contradicción de tesis 103/2020 de si sólo es aplicable para los Órganos Internos de Control y Contralorías o, en su caso, también para la ASF." (SIC)

⁴ De rubro **RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LA INFRACCIÓN HAYA OCURRIDO ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017 SIN QUE SE HUBIERE INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, RESULTA APLICABLE PARA EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LA LEY GENERAL**

- iii. Que el contenido del artículo 217, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los órganos para los cuales resulta obligatoria la observancia de los criterios jurisprudenciales emanados del Pleno y de sus Salas.
- iv. Los datos de contacto del Instituto Federal de Defensoría Pública por ser el órgano del Poder Judicial de la Federación que tiene a su cargo la prestación del servicio público de defensoría pública en asuntos penales y de asesoría jurídica en diversos asuntos de la materia penal.

III. La respuesta anterior se notificó al solicitante, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el siete de diciembre de dos mil veinte.

IV. Mediante oficio **INAI/STP/DGAP/1027/2020**, la Directora General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales remitió a este Alto Tribunal el presente recurso de revisión.

Competencia de este Comité Especializado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁵, las controversias en materia de acceso a la

DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).

⁵ “**Artículo 6.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de

información pública o protección de datos personales suscitadas en el renglón de la información administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán conocidas y resueltas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quedando sólo reservadas a este Alto Tribunal las del orden jurisdiccional.

Dichas controversias permanecen en el ámbito de este Alto Tribunal para su debida clasificación; esto es, para determinar si su naturaleza es jurisdiccional o administrativa.⁶

Se consideran de carácter jurisdiccional todos aquellos asuntos que estén relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de este Alto Tribunal, en términos de lo previsto por la Ley Orgánica del Poder

terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

[...]

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

[...]

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

[...]

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.

⁶Acuerdo del Comité Especializado de Ministros relativo a la Sustanciación de los Recursos de Revisión que se Interponen en Contra del Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, en Posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

[...]

Segundo. Tratándose de los artículos 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los recursos de revisión que se interpongan ante la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial y/o los Módulos de Información y Acceso a la Justicia, respecto de solicitudes de acceso a la información pública, permanecerán en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su debida clasificación.

Judicial de la Federación. En consecuencia, aquellos que no cumplan con dicho criterio son considerados de carácter administrativos.⁷

Los recursos que se estiman relacionados con información de carácter jurisdiccional son sustanciados por este Comité Especializado de este Alto Tribunal. Los recursos de carácter administrativo se remiten al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para su sustanciación.

Clasificación de la información

Con fundamento en lo previamente expuesto, se procede a realizar la clasificación de la información, ya sea jurisdiccional o administrativa, a efecto de determinar qué órgano será el encargado de sustanciar el recurso de revisión que nos ocupa.

Del contenido de la solicitud de información precisada en párrafos precedentes se advierte que la misma encuadra dentro de temas o asuntos relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de este Alto Tribunal, en términos de lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, tiene relación directa con los asuntos que son competencia del Pleno y la Presidencia de esta Suprema

⁷ En términos de lo dispuesto tanto en el artículo 195 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como en el diverso 166 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

Artículo 195. Se entenderán como asuntos jurisdiccionales, aquellos que estén relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que precise la Ley Federal.

Artículo 166. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley General, se considerarán como asuntos jurisdiccionales, todos aquellos que estén relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de justicia competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Corte, de conformidad con dicha Ley Orgánica y las leyes aplicables.

Lo anterior es así, en virtud de que el peticionario hizo un cuestionamiento respecto a la aplicabilidad de una resolución de este Alto Tribunal –la contradicción de tesis 103/2020–, ejecutoria que fue emitida como resultado del ejercicio de la función de impartición de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.⁸

Por tales motivos debe determinarse que la petición de información de la cual deriva el presente recurso de revisión **tiene el carácter de jurisdiccional** y, por ende, éste deberá ser sustanciado por el Comité Especializado de Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a su competencia.

Procedencia del recurso

Una vez establecidos los antecedentes del caso, fijada la clasificación del asunto y la competencia del Comité Especializado para conocer del presente recurso de revisión, se procede a realizar el estudio de procedencia del medio de impugnación que nos ocupa.

⁸ **Artículo 21.** Corresponde conocer a las Salas:

[...]

VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los tribunales colegiados de circuito con diferente especialización, para los efectos a que se refiere la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

De los antecedentes previamente señalados, este Comité Especializado advierte que no nos encontramos ante una solicitud de acceso a la información, sino ante una consulta y, por ende, en términos del artículo 155, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe desecharse el presente recurso.

En efecto, tanto en su escrito inicial como al interponer el presente recurso de revisión, el recurrente únicamente hizo un cuestionamiento respecto a la posible aplicabilidad de lo resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la contradicción de tesis 103/2020, a la Auditoría Superior de la Federación.

En ese sentido, resulta claro que no se requirió algún documento en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado del ejercicio de sus funciones. Por el contrario, el peticionario se limitó a solicitar una explicación sobre la posible aplicabilidad de un precedente emitido por este Alto Tribunal; cuestión que para ser atendida, requiere de la emisión de una opinión jurídica.

Se explica. Para determinar si lo establecido por la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis referida es aplicable a la Auditoría Superior de la Federación, resultaría necesaria la emisión de un pronunciamiento específico y particular efectuado a partir de un estudio y análisis racional, y no la entrega de un documento específico.

Una solicitud de acceso a la información no tiene dicho alcance, pues ésta exclusivamente comprende el suministro de un documento en concreto y preexistente, en posesión del sujeto obligado derivado del ejercicio de sus funciones, tal como se

encuentra regulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública⁹, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública¹⁰ y Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento

⁹ **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.

Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.

Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia: I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

¹⁰ **Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad con la normatividad aplicable.

Artículo 13. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

y atribuciones del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹¹.

En ese sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 3°, fracción VII, señala que deberá entenderse por “Documento”, *los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencias, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración.*

De lo anterior se advierte que la Ley General circunscribe el alcance de las solicitudes de acceso a la información a requerir documentos que contengan la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, así como aquellas acciones que estuvieran obligados a

¹¹ **Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**
Artículo 9

De la información disponible

Si la información ya está disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, la Unidad General, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, hará saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que podrá consultar, reproducir y/o adquirir dicha información.

Por información disponible se entenderá aquella que no requiere ningún tipo de procesamiento y basta orientar al solicitante sobre las condiciones particulares de accesibilidad.

En estos casos, una vez que se turne la solicitud, las instancias que detecten la disponibilidad de la información en términos de los párrafos anteriores, deberán notificar tal circunstancia a la Unidad General dentro de los dos días hábiles siguientes al turno respectivo.

Artículo 18

De las capacidades institucionales

En aquellos casos en que la información solicitada implique análisis, estudio o procesamiento de documentos, cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas de la Suprema Corte para cumplir con los plazos establecidos, se pondrán a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.

En todos los casos, el Comité autorizará dicha modalidad de acceso y determinará las medidas necesarias para que se realice la consulta directa.

documentar de acuerdo con sus competencias, facultades y funciones.

Es importante reiterar que el acceso a la información que se garantiza a los gobernados en las leyes aplicables a la materia, tiene como finalidad permitir a éstos conocer las determinaciones y decisiones adoptadas por este Alto Tribunal, a través de los documentos que para tal efecto emite, pero de ninguna manera dichas leyes otorgan el derecho a obtener algún pronunciamiento específico sobre la justificación legal de los actos del mismo o, menos aún, sobre la interpretación de los pronunciamientos emitidos.

Por lo anterior, al no existir un documento proveniente de esta Suprema Corte de Justicia en el que se precise la aplicabilidad de lo resuelto por este Alto Tribunal en la contradicción de tesis 103/2020 a los procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias iniciados por la Auditoría Superior de la Federación, no es posible otorgar acceso al documento respectivo, ya que propiamente no existe algún registro en el que conste dicha información, tal como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información los órganos vinculados por dicho ordenamiento sólo están obligados a entregar documentos que se encuentren en sus archivos.

En esa tesitura, si el solicitante realiza cuestionamientos que no tengan expresión documental y cuya respuesta requiera la emisión de una opinión jurídica para solventar los planteamientos realizados en ellas, ésta constituye una consulta y no una solicitud de acceso a la información.


Al tenor de lo previamente expuesto, toda vez que la referida

petición se trata de una consulta y no de una solicitud de acceso a la información, se considera que en el presente asunto se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 155, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando:

[...]

VI. Se trate de una consulta.”

En virtud de las anteriores consideraciones y al actualizarse la causa de desechamiento por improcedencia prevista en el artículo 155, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta conducente registrar el presente asunto bajo el expediente **CESCJN/REV-1/2021** y **DESECHAR EL RECURSO DE REVISIÓN** interpuesto por .

En esa tesitura, **se instruye** a la Secretaría de Seguimiento de Comités de Ministros remitir a la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial el presente expediente para los efectos a que haya lugar.

En similares términos se pronunció el Ministro Presidente del Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al desear los recursos de revisión **CESCJN/REV-81/2019** y **CESCJN/REV-41/2020**, por proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve y cinco de enero del año en curso, respectivamente.

Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente, por conducto de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial.

Notifíquese el presente acuerdo a la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial como parte del procedimiento, a través de la Secretaría de Seguimiento de Comités de Ministros.

Así lo proveyó y firma el señor Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, Presidente del Comité Especializado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Manuel Alejandro Téllez Espinosa, Secretario de Seguimiento de Comités de Ministros, que autoriza y da fe.

Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial
Versión pública del Recurso de Revisión CECJN/REV-1/2021.

Contiene la siguiente información confidencial: Nombre del solicitante.

En términos de lo previsto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial, que encuadra en dichos supuestos normativos.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

[illegible][illegible]